

Entrada 3430

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Al amparo de lo establecido en el artículo 92 y siguientes del vigente Reglamento Provisional del Congreso de los Diputados, tengo el honor de presentar ante esa Mesa la proposición de Ley sobre Divorcio, en nombre del Grupo Parlamentario Comunista.

PALACIO DE LAS CORTES,
Madrid, 2 de junio de 1978

Ramón

Fdo.: Ramón Llameros Gómez
Secretario del Grupo Parlamentario
Comunista.

ANC2 Ag3 Nr. 125a

EXPOSICION DE MOTIVOS

La introducción del divorcio vincular en el Derecho Civil Español es una exigencia de nuestra sociedad. No sólo los centenares de miles de personas que sufren las consecuencias de una legislación que no permite romper unos lazos legales que carecen ya de todo soporte afectivo y que ni siquiera se cimentan en muchos casos, en una comunidad de vida, sino la gran mayoría de los que afrontan la cuestión sin prejuicios derivados de su situación personal, estiman la urgente necesidad de la introducción del divorcio. Por otra parte, la necesidad de alinear nuestras leyes, en la mayor medida posible, con las de los demás pueblos de Europa y de eliminar los puntos de contraste que pueden dificultar el creciente comercio jurídico intereuropeo, abonan la necesidad de una reforma cuya base racional y ética no pueda ponerse en duda.

No se trata, por lo demás de atentar contra la estabilidad de la institución familiar. Cuando desaparecen las relaciones afectivas en que se basa la convivencia matrimonial - desaparecen también las bases de la auténtica estabilidad de la familia. La indisolubilidad jurídica de la relación matrimonial no garantiza, pues, una auténtica estabilidad sino una mera apariencia que no tiene más virtualidad práctica - que la meramente patrimonial. La familia que carece de las necesarias bases afectivas es, a la vez, una institución perjudicial para la formación de los hijos. La moderna pedagogía ha mostrado claramente que para una formación equilibrada es mucho más conveniente la plena correspondencia entre la auténtica situación afectiva y la jurídica.

El divorcio vincular es, pues, un elemento de normalización de las relaciones civiles y, en este sentido, es un elemento de consolidación de la democracia, si damos al término democracia su auténtica dimensión de libertad de los ciudadanos para abordar la solución de sus problemas personales y colec-

tivos con la máxima participación, dentro de un orden jurídico adaptado a la realidad de las cosas.

Se trata, en definitiva, de abordar los problemas reales y de designar a los hechos por su nombre, sin buscar refugio en fórmulas jurídicas y éticas pretendidamente inmutables para impedir el planteamiento realista y constructivo de las soluciones jurídicas que hoy exige nuestra sociedad.

Al regular el divorcio hay que partir de la base de que dicha institución ha de tener como soporte, de acuerdo con la tónica dominante en las modernas legislaciones, no tanto la determinación de una culpa imputable a uno u otro cónyuge, sino la ruptura irreversible -según una previsión racional- de la relación conyugal, o la existencia de conductas unilaterales que hagan virtualmente imposible el pacífico mantenimiento de tal relación. Por ello la regulación de las causas de divorcio atiende fundamentalmente a establecer una serie de supuestos en que parece indudable la cesación de la base afectiva y de comunidad de vida en que el matrimonio, para merecer el nombre de tal, se ha de sustentar. Se admite por ello, el divorcio por acuerdo de ambos cónyuges, pero para evitar decisiones precipitadas -en perjuicio incluso de los propios cónyuges-, se establece un razonable plazo de reflexión. Se regula también el divorcio con base en el simple hecho de la cesación de la vida conyugal, causa que se ha abierto paso en el Derecho comparado; al concretar esta causa se expresa la irrelevancia de la motivación de la ruptura, con lo que se cobija en la misma, supuestos variados y se simplifica la casuística, y se prevé una duración de la separación lo suficientemente larga para que la cesación de la vida conyugal sea significativa, pero sin dilatarla irracionalmente y, por supuesto, sin distinguir entre separación de hecho y de derecho.

En cuanto a los efectos del divorcio, la normativa prevista es muy genérica. Toda casuística es peligrosa en una materia en que la complejidad de las relaciones humanas rebasará siempre toda concreta previsión legislativa y en que el arbitrio judicial amplio, aún con sus innegables inconvenientes, supone la solución menos inconveniente.

Artículo 54.-

Son causas de divorcio:

1º.- La cesación, voluntaria o involuntaria, por cualquier causa de la vida conyugal, (durante los dos años inmediatamente anteriores a la demanda de divorcio.)

2º.- El incumplimiento grave de los deberes propios del matrimonio.

3º.- La enfermedad de cualquiera de los cónyuges que afecte gravemente a la vida en común. No podrá decretarse el divorcio en virtud de esta causa, si no queda asegurada la asistencia al cónyuge enfermo.

4º.- La infidelidad y los malos tratos, injurias y ofensas graves a la integridad, dignidad y libertad, imputable a uno de los cónyuges, en relación al otro o a los hijos.

5º.- La imposibilidad de la normal convivencia entre los cónyuges por incompatibilidad de caracteres.

Artículo 55:

La acción de divorcio puede ejercitarse por cualquiera de los cónyuges con base en las causas primera y quinta; las restantes sólo podrán ser invocadas por el cónyuge al que no se refiera la causa invocada.

La acción de divorcio se extingue por muerte de cualquiera de los cónyuges y por la reconciliación expresa de los mismos.

Artículo 56:

Serán ejecutables en España las sentencias de divorcio dictadas en países extranjeros, fundadas en el mutuo acuerdo de las partes. También lo serán las restantes sentencias extranjeras.

la decisión
voluntaria de ambos

AIC2Ap3Nº 125d

Hijos: 1º ^{común acuerdo} 2º La mujer tiene preferencia a escoger

quien tenga la tutela
ejerce la patria potestad

3.- Fijar discrecionalmente en poder de cuál de los cónyuges han de quedar todos o alguno de los hijos y quién de aquéllos ejercerá la patria potestad.

En casos excepcionales se podrán encomendar los hijos a otra persona o institución adecuada, que asumirá las funciones tutelares, correspondiendo las del protutor y consejo de familia a la autoridad judicial.

El Juez discrecionalmente determinará el tiempo, modo y lugar en que el cónyuge apartado de los hijos podrá visitarlos y comunicar con ellos y tenerlos en su compañía.

4.- En cuanto al régimen económico matrimonial, se seguirán las siguientes reglas:

Cada uno de los cónyuges tendrá la administración y disposición de sus bienes privativos y se entenderán revocadas las facultades que uno de ellos hubiese otorgado al otro.

Se mantendrá, en cuanto a los bienes dotales, el régimen anterior a la presentación de la demanda, salvo que el Juez estime conveniente transferir a la mujer la administración de los bienes de la dote inestimada.

El Juez, atendidas las circunstancias del caso, determinará a cuál de los cónyuges se atribuye la administración de los bienes gananciales o de parte de ellos.

Será necesaria licencia judicial para los actos que excedan de la mera administración de los gananciales, cualquiera que sea el cónyuge que los administre.

Se procederá con criterio análogo al señalado en esta regla cuarta cuando el régimen económico matrimonial sea distinto del de gananciales.

5.- Señalar alimentos a la mujer, y, en su caso, al marido, así como a los hijos que no queden en poder del obligado a dar alimentos, sin que éste pueda optar por prestarlos en la

ANC 2 Ap 3 N 125

- 6 -
En caso de que la mujer no trabaje, seguro de
desempleo y S. S. ?
propia casa.

6.- Acordar, si procede, el abono de litis expensas, deter-
minando la cuantía y la persona obligada al pago.

Artículo 69.-

El matrimonio contraído de buena fe produce efectos civiles, aunque sea declarado nulo por causa de bigamia o por cual-
quier otra.

Si ha intervenido buena fe de parte de uno sólo de los cón-
yuges, surge únicamente efectos civiles respecto de él y de
los hijos.

La buena fe se presume, si no consta lo contrario.

Si hubiere intervenido mala fe por parte de ambos cónyuges,
el matrimonio sólo surtirá efectos civiles respecto de los
hijos.

Artículo 70.-

El Juez competente para la ejecución de la sentencia de nul-
lidad determinará discrecionalmente el régimen de patria po-
testad y guarda de los hijos, teniendo en cuenta:

1º.- El interés de los hijos.

2º.- El acuerdo de los cónyuges, cuando no sea contrario al
interés de los hijos que serán cónyuges en cuanto sea con-
veniente.

Artículo 71.-

El régimen sobre patria potestad establecido en el artículo
anterior podrá ser modificado en cualquier momento en interés
de los hijos.

suficiente

Mc2 Ap3 N° 125

Artículo 73.-

La sentencia de divorcio producirá la disolución del matrimonio civil y la extinción de los efectos civiles del matrimonio canónico.

La sentencia de divorcio determinará la extinción, si la hubiere de la sociedad conyugal. Si el matrimonio estuviere sujeto al régimen de separación de bienes, en la sentencia de divorcio, a solicitud de la mujer se podrá conceder a ésta una indemnización con cargo a los bienes adquiridos a título oneroso por el marido, durante el matrimonio. Para fijar la cuantía de la indemnización, se tendrá en cuenta la actividad de la mujer en el hogar y la colaboración prestada, en su caso, a las actividades lucrativas del marido. No procederá indemnización alguna por tales conceptos, cuando el divorcio se base exclusivamente en las causas una y cuatro del artículo 54, por actos imputables a la mujer. ?

La sentencia acordará lo procedente sobre la patria potestad y guarda de los hijos y régimen de visitas a los mismos, teniendo en cuenta primordialmente el interés de aquellos. Los que deberán ser oídos al efecto cuando por su edad sea ello conveniente y, en cuanto sea procedente el acuerdo de los padres sobre la materia. También se podrá decretar la privación de la patria potestad y la constitución de la tutela legal.

La sentencia determinará los efectos del divorcio en cuanto a alimentos del cónyuge necesitado de los mismos, teniendo en cuenta:

- 1°.- La situación económica de las partes.
- 2°.- Sus posibilidades de trabajo.
- 3°.- La conducta de los cónyuges en relación a la motivación del divorcio.
- 4°.- La dedicación que hayan de tener respecto a los hijos menores y las cargas que éstos supongan.

Igualmente fijará las prestaciones alimenticias de los padres respecto de los hijos menores, y las garantías que hayan de

10 -
exigirse para el cumplimiento de las obligaciones alimenticias, cuya cuantía se adaptará anualmente de modo automático a las variaciones del costo de la vida.

Lo dispuesto sobre patria potestad y guarda de hijos y sobre alimentos, podrá ser modificado en cualquier momento, por el teración de las circunstancias determinantes.

Artículo 74.-

Las ejecutorias de separación producirán los efectos señalados en el párrafo segundo y siguientes del artículo anterior y la separación de los cónyuges. Corresponderá al Juez civil, competente para la ejecución de las sentencias canónicas de separación, la adopción de las medidas sobre los hijos y los alimentos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 105.-

Son causas de separación las previstas para el divorcio en los artículos 53 y 54, pero no será aplicable la doble retificación exigida en el primero de los artículos citados, en la causa cuarta del segundo.

a

Se aplicará la separación lo dispuesto en el artículo 55.

Artículo 2º.-

El juicio de divorcio fundado en el artículo 54 del Código Civil, se tramitará de acuerdo con los preceptos reguladores del juicio de menor cuantía complementados por las siguientes normas:

- 1.- Será Juez competente el de primera instancia del lugar en que se hallen domiciliados ambos cónyuges. Si estos residieren en distintos partidos judiciales será competente a elección del demandante, el del último domicilio conyugal o última residencia conocida del demandado, debiendo el Juez examinar de oficio la propia competencia.

2.- El Juez adoptará las medidas necesarias para la efectividad de las prestaciones de alimentos que impusiere. El incumplimiento injustificado de lo acordado sobre alimentos y sobreguarda de hijos, se considerará desobediencia grave a los efectos del artículo 237 del Código Penal.

3°.- Contra la sentencia dictada por la Audiencia en apelación de la de Primera Instancia, no se dará recurso alguno.

4°.- El procedimiento será gratuito.

Artículo 3°...

El divorcio por solicitud de ambos cónyuges será homologado en trámite ordinario de jurisdicción voluntaria cuando haya pleno acuerdo de las partes sobre los efectos personales y patrimoniales del divorcio y con observancia del trámite de la doble ratificación prevista en el artículo 53. En defecto de tal acuerdo, el Juez resolverá sobre los efectos del divorcio por los trámites del juicio verbal, convocando al efecto a las partes en el acto de la segunda ratificación, para la celebración del juicio que habrá de iniciarse dentro de los ocho días siguientes al acto de la ratificación. El procedimiento será gratuito.

Artículo 4°.-

(En los procedimientos de divorcio el Ministerio Fiscal será parte cuando alguno de los cónyuges sea menor, incapaz o se halle en ignorado paradero.

Artículo 5°.-

Se considerarán nulos de pleno derecho los pactos opuestos a los preceptos de la presente Ley.

A102 Ap 3 N 125

PCE

Grupo Parlamentario Comunista

PSUC

Marqués de Cubas, 6 - 4º

Teléfonos: 232.41.46 - 232.06.57

MADRID - 14

ENMIENDA NUM. 88

De adición.

Añadir una nueva Disposición Adicional del siguiente tenor:

"Cuando la pensión alimenticia establecida en esta Ley sea inferior al salario mínimo interprofesional, el cónyuge que la perciba, si se encuentra sin empleo, tendrá derecho a una prestación asistencial. La cuantía de la misma será la diferencia entre la pensión alimenticia y el salario mínimo interprofesional, financiándose con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y con la duración prevista en la normativa general sobre empleo".

MOTIVACION:

La necesidad de atender a situaciones específicas de desempleo, que exigen la correspondiente protección dentro del marco general de la política de empleo.